

C.A. de Santiago

Santiago, seis de diciembre de dos mil veintiuno.

Al folio N° 16: a todo, téngase presente.

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

**Primero:** Que, comparece Erika Díaz Baeza, vendedora, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la dictación del Decreto Exento N° 23, que dispone la vacunación obligatoria contra la influenza para el año 2021 para el grupo de la población que indica, lo que vulnera sus garantías fundamentales consagradas en los numerales 1, 4, 5, 6 y 9 de la Constitución Política de la República.

La recurrente señala tener 60 años y sufrir alergia al metal, lo que la ha llevado a desarrollar una vida con diversos autocuidados, evitando el contacto con cualquier agente peligroso que le pueda provocar alergias, lo que le ha permitido vivir una vida sana y sin problemas.

Por ello, ha evitado vacunarse contra la influenza y el COVID-19, porque ello le impediría controlar el ingreso de agentes externos a su organismo que podrían afectar su salud.

Indica que el acto recurrido selecciona a determinados grupos de la población de manera completamente arbitraria, y que por convicciones personales y en uso de su libertad de conciencia se opone a recibir un tratamiento invasivo y cuestionado a nivel mundial como es el de las vacunas tradicionales.

Luego expone diversos antecedentes médicos y de estudios científicos que demostrarían la peligrosidad de utilizar vacunas contra la influenza y el COVID-19 en la población, asegurando que existe una relación entre la vacunación de la influenza y la mortalidad alcanzada por el COVID19.

Alega que se afecta su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, porque la vacunación obligatoria podría provocarle efectos adversos, como reacciones alérgicas, choque anafiláctico, anafilaxis y angioedema.



Alega que se afecta su libertad de conciencia, pues de acuerdo a sus creencias y filosofía religiosa, su salud integral depende del equilibrio natural y cósmico, y se desarrolla implementando terapias alternativas.

Solicita, en concreto, ordenar de inmediato se deje sin efecto la obligación impuesta sobre la persona de la recurrente, de vacunarse contra la influenza y el COVID-19, y se obligue a la recurrida a emitir un informe con el fundamento científico para imponer la medida de vacunación.

**Segundo:** Que, informando, Jorge Hubner Garretón, abogado, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, solicita el rechazo del recurso de protección, alegando, en primer lugar, la extemporaneidad del recurso, fundado en que en realidad, el instrumento normativo que ejecuta el proceso de vacunación obligatoria contra Enfermedades Inmunoprevenibles de la Población del País está dispuesto y previsto en el Decreto Exento N° 6, de 2010, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial el 19 de abril de 2010, por lo que el recurso sería abiertamente extemporáneo.

En segundo lugar, plantea que la acción deducida no es una acción popular, pues la pretensión de la recurrente incide en términos generales y no solo en su favor, pues cuestiona la concreción de la política pública.

En tercer lugar, alega que la acción de protección no es un medio idóneo para la adopción de políticas públicas sanitarias, con lo que se pretende traspasar a los tribunales de justicia una decisión que corresponde a la Administración del Estado.

En cuanto al fondo, alega que no existe una acción u omisión ilegal o arbitraria que sea imputable a la autoridad recurrida, en razón de que se trata de una política pública establecida de acuerdo a sus competencias legales, y que ha tenido un gran éxito en la prevención de enfermedades en nuestro país, sin que se pueda vislumbrar, en el caso concreto, como se afectan los derechos fundamentales de la recurrida.

Solicita el rechazo del recurso de protección con expresa condena en costas en atención a su manifiesta falta de fundamento.

**TERCERO:** Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos



preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

**CUARTO:** Que consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

**QUINTO:** Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, será desestimada teniendo para ello únicamente presente que el acto contra el cual el mismo se dirige es el Decreto Exento N° 23 de fecha 29 de marzo de 2021, dictado por el Ministro de Salud don Enrique Paris Mancilla, del cual la recurrente señala haber tomado conocimiento el día 15 de abril del mismo año, circunstancia que no fue controvertida por la recurrida. De esta manera, al haber sido interpuesto la presente acción cautelar con fecha 11 de mayo del presente año, la misma se ejerció, oportunamente, dentro del plazo de 30 días que contempla el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia.

**SEXTO:** Que luego de lo dicho, en este caso es posible concluir que lo que en definitiva reclama la actora es la supuesta ilegalidad de la decisión que contiene el Decreto Exento N° 23, de 29 de marzo de 2021, del Ministerio de Salud, que dispone para este año la vacunación obligatoria contra la influenza de los grupos de población objetivos que detalla, según lo dispuesto en el N° 12 del Decreto Exento N° 6, del año 2010, que dispone la vacunación obligatoria contra enfermedades inmunoprevenibles de la población del país, con las finalidades de, por un lado, prevenir la mortalidad y morbilidad grave en grupos de la población definidos por las condiciones biomédicas que se asocian a mayor riesgo de muerte y complicaciones causadas por la infección del virus influenza y, por otro, preservar la integridad de los servicios asistenciales. En razón de lo anterior, solicita la recurrente que esta Corte a través de esta acción cautelar deje sin efecto la aludida normativa a su respecto y que, además, se ordene a la recurrida



explicarle los motivos que habrían ameritado la decisión de disponer la vacunación obligatoria a determinados grupos objetivos de la población, peticiones que desde ya exceden el ámbito de competencia de esta Corte mediante un recurso de protección.

En efecto, el contenido del aludido Decreto Exento N° 23 responde exclusivamente a la evaluación, elaboración y corrección de una política pública que constitucionalmente está entregado de manera exclusiva a otro poder del Estado por tratarse de un acto de mero gobierno, el cual no puede ser modificado por esta vía;

**SÉPTIMO:** Que sin perjuicio de lo anterior, aparece relevante reflexionar que las medidas que ordenan vacunaciones masivas se orientan no sólo a proteger la vida y salud de quien recibirá dicha inoculación, sino también la de las demás personas que integran la sociedad, quienes podrían enfermar e incluso morir tras el contagio de un virus portado por un ser humano no inmunizado y vector del mismo.

En este orden de ideas, resulta significativo considerar que conforme reconoce el artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

*“1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.*

*2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”;*

**OCTAVO:** Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, **se rechaza** el recurso deducido por doña **Erika Díaz Baeza** en su presentación de fecha 11 de mayo de este año.

Regístrese y comuníquese.

Protección N°12.503-2021





ELHBLGLKVL

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Suplentes Andrea Díaz-Muñoz B., Matias Felipe De La Noi M. y Abogado Integrante Rodrigo Antonio Montt S. Santiago, seis de diciembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a seis de diciembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

